

Lo anterior, en virtud de que se reclaman omisiones que carecen de efectos positivos; es decir, son actos que no requieren ejecución material; por tanto, si la demanda en cuestión se presentó dentro de la jurisdicción de este juzgado federal, resulta patente que es competente para conocer de ella.

Dicha determinación encuentra sustento en la jurisprudencia 1a./J. 17/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo I, página 500, cuyo epígrafe es:

“COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA ACTOS QUE NO REQUIERAN DE EJECUCIÓN MATERIAL. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA RELATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 37, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).”

SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Con el propósito de hacer efectivo el derecho de acceso a la justicia que asiste a todo gobernado y de no hacer nugatoria la defensa del quejoso, para la correcta fijación de la litis constitucional, el juzgador de amparo debe analizar e interpretar el escrito de demanda en su integridad, atendiendo siempre a la intencionalidad de su autor, armonizando su contenido, con la totalidad de la información del expediente, de tal manera que se logre una adecuada congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.

Aquellas directrices encuentran sustento en la jurisprudencia P./J. 40/2000 y en la tesis aislada P. VI/2004, ambas del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Abril de 2000, y Tomo XIX, Abril de 2004, páginas 32 y 255, respectivamente, de epígrafes: ***“DEMANDA DE AMPARO. DEBE***

SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD” y “ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO”.

Con base en esas premisas y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que ********* sometió a escrutinio constitucional los siguientes actos:

1. De la Jueza Penal de Control del Segundo Circuito Judicial del Estado de Hidalgo, adscrita al Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo: la **omisión verificar el cumplimiento de la orden de aprehensión dictada en audiencia de cuatro de octubre de dos mil dieciocho en la causa penal *******, en contra de (i) ****** *******, (ii) ****** *******, (iii) ******* *******, (iv) ***** *******, (v) ****** *******, (vi) ****** *******, (vii) ******* *******, (viii) ******* ****, (ix) ******* *******, (x) ****** *******, (xi) ****** ******* y (xii) ******* *******.

2. De la Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación con Personas Detenidas III del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo; así como Director General y Comandantes de los Grupos “Aprehensiones I”, “Aprehensiones II” y “Tulancingo”, los últimos cuatro de la Policía Investigadora de la Procuraduría General de Justicia; todos del Estado de Hidalgo: la **omisión de ejecutar** la orden de captura precisada en el punto anterior.

TERCERO. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. De acuerdo con la técnica que rige al juicio de amparo, previo a avocarse al estudio de la improcedencia y de los conceptos de violación, lo aleguen o no las partes, debe resolverse respecto de la certeza o inexistencia del acto tildado de inconstitucional, pues por razón de

Luego, la orden de aprehensión dictada se entregará física o electrónicamente al Ministerio Público, quien la ejecutará por conducto de los agentes policiales a su mando. Como se puede observar, el cuerpo normativo citado es claro en establecer que autoridades tienen la obligación de cumplimentar el mandato judicial de mandato.

En efecto, acorde con el artículo 145 del Código Nacional de Procedimientos Penales, **corresponde de manera indirecta al Ministerio Público y, de manera directa, a los elementos de la policía especializada en la investigación penal.**

En las relatadas condiciones y como correctamente lo aseveró la juzgadora responsable, **las autoridades jurisdiccionales no tienen la obligación legal de verificar la ejecución del mandamiento de captura**, de ahí que al no contar con esa obligación, no es posible establecer la existencia de la omisión que se les reclama a dicha autoridad.

En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se impone **sobreseer** en el presente juicio de amparo, respecto de las omisiones reclamadas a la Jueza Penal de Control del Segundo Circuito Judicial, adscrita al Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo y Comandantes de los Grupos “Aprehensiones I” y “Aprehensiones II”, los últimos dos de la Procuraduría General de Justicia, todos del Estado de Hidalgo, al haber quedado demostrada su **inexistencia**.

CUARTO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierta la omisión imputada a la Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación con Personas Detenidas III del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Director General y Comandante del Grupo “Tulancingo”, los últimos dos de la Policía Investigadora, todos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, no obstante que hayan negado su existencia al rendir su informe con justificación.



A fin de desvirtuar la negativa expresada por las responsables, debe partirse de la premisa apuntada en el considerando anterior; esto es, que exista la obligación de ser exigida por la parte quejosa, derivada de una disposición normativa o de un mandato jurisdiccional o administrativo (elemento normativo), así como la abstención de las autoridades de cumplirla (elemento fáctico).

En atención a lo anterior, se tiene probada la existencia de la **orden de aprehensión de cuatro de octubre de dos mil dieciocho en la causa penal *******, dictada por la Jueza Penal de Control del Segundo Circuito Judicial del Estado de Hidalgo, adscrita al Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, a partir del disco óptico de almacenamiento (DVD) que contiene copia auténtica del registro audiovisual de la audiencia en fue emitido ese acto; probatura que es valorados en términos de los ordinales 129, 188, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por tratarse de un elemento informático derivado de la ciencia emitido por una autoridad en el ejercicio de sus funciones, equiparables a la prueba documental en términos del numeral 217 de la citada legislación adjetiva civil.

Luego, como quedó establecido, conforme al artículo 145 del Código Nacional de Procedimientos Penales, **corresponde al Ministerio Público y a la Policía Investigadora** ejecutar las ordenes de aprehensión dictadas por los jueces de control; lo cual queda confirmado con el contenido de los numerales 4, 5, I, XI y XIX, 6 y 11, fracción XIII, de la Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado de Hidalgo, los cuales, señalan:

“Artículo 4. El Ministerio Público tiene a su cargo ejercer la representación y defensa de los intereses de la sociedad, investigar y perseguir los delitos, así como las demás atribuciones que el orden jurídico disponga.”

“Artículo 5. Son funciones del Ministerio Público:

[...]

I. Ejercer la conducción y mando de la investigación de los hechos posiblemente constitutivos de delito.

[...]

XI. Dirigir a las policías en sus funciones de investigación y persecución de delitos, vigilando que los mismos realicen sus actuaciones con pleno respeto a los derechos humanos y conforme a los principios de legalidad y objetividad.

[...]

XIX. Las demás que le otorguen el Código y demás disposiciones legales o reglamentarias.”

“Artículo 6. En el ejercicio de sus funciones, son auxiliares del Ministerio Público los servicios periciales y los cuerpos de seguridad pública, los cuales están obligados a cumplir con las órdenes o peticiones que les realice, a informarle de forma inmediata de los asuntos en que intervengan con ese carácter y a proporcionarle sin dilación, la información que les requiera.”

“Artículo 11. Para el despacho de los asuntos que competen al Ministerio Público, podrá integrarse con las siguientes unidades administrativas u órganos:

[...]

XIII. Dirección General de la Policía Investigadora.”

Las porciones normativas transcritas, robustecen más lo apuntado en líneas anteriores, en el sentido de que el Ministerio Público, como órgano investigador y persecutor de los delitos, es la autoridad a quien compete la ejecución de la orden de aprehensión, al menos de forma indirecta, ya que se auxilia de la Dirección General de la Policía Investigadora, cuyos integrantes están obligados a cumplir con las órdenes o peticiones que aquella institución les realice.

Así, contrarió a lo manifestado por la Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación con Personas Detenidas III del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, en términos de las disposiciones normativas adjetivas y orgánicas citadas, está obligada

Lo anterior, sin lugar a dudas, evidencia la actitud pasiva de las autoridades responsables, las cuales se encuentran obligadas legalmente a dar cumplimiento a los mandamientos judiciales, demostrándose con ello el desinterés en cumplir con las funciones que tienen encomendadas, lo cual vulnera los derechos constitucionales que asisten al quejoso.

Por todo lo anterior, se concluye que la Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación con Personas Detenidas III del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Director General y Comandante del Grupo "Tulancingo", los últimos dos de la Policía Investigadora, todos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, con su nula actividad tendente a dar cumplimiento al mandamiento de captura, han infringido las prerrogativas fundamentales de *********, *********, *********, *********, pues no demostraron la existencia de algún impedimento legal (como lo pudiera ser la cancelación de la orden de captura o el otorgamiento en algún diverso juicio de amparo a alguno de los quejosos de la suspensión) o fáctico (fallecimiento de los inculpados, por ejemplo), que justificara su omisión, pues correspondía precisamente a las autoridades responsables acreditar que no incurrieron en la omisión que se les reclama, lo que únicamente se podría lograr exhibiendo pruebas que demostraran actuaciones tendentes a su cumplimiento, o bien, de las que se evidenciara alguna imposibilidad jurídica o material que impidieran su cumplimiento, sujeta, desde luego, a valoración; todo lo cual en el caso no aconteció.

En esas condiciones, al haberse vulnerado los artículos 17, segundo párrafo, y 20, Apartado B, fracciones II, párrafo primero, y IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso *********, *********, *********, *********, para el efecto de que, atendiendo al precepto 77, fracción II, y 192, último párrafo, de la Ley de Amparo y dentro del **plazo de treinta días**, contado a partir del



día siguiente al que se les comunica que esta resolución ha quedado firme, la Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación con Personas Detenidas III del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Director General y Comandante del Grupo "Tulancingo", los últimos dos de la Policía Investigadora, todos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo:

- Cesen su conducta omisiva y ordenen y practiquen todos los actos, medidas y gestiones necesarias, suficientes, idóneas y aptas para lograr el cumplimiento a la orden de aprehensión dictada en audiencia de cuatro de octubre de dos mil dieciocho en la causa penal ***** , en contra de (i) **** ***** , (ii) **** ***** , (iii) ***** ***** , (iv) **** ***** , (v) **** ***** ***** , (vi) **** ***** , (vii) **** ***** ***** , (viii) ***** * * * * ***** , (ix) ***** **** ***** , (x) **** ***** ***** , (xi) ***** ***** ***** **** y (xii) ***** ***** .

- En caso de lograr, la detención de alguno de los citados inculpados, procedan en términos del artículo 16 de la Constitución General y el Código Nacional de Procedimientos Penales.

- Finalmente, deberán informar al quejoso los resultados obtenidos.

Conviene aclarar que el efecto de esta concesión no implica obligar a las responsables a lograr obligatoriamente la captura de los inculpados, ya que, deben tomarse en cuenta que los factores que inciden en la inexecución de una orden de aprehensión son múltiples y variados, **muchas veces ajenos a las autoridades ejecutoras; como podría ser que se sustraen de la acción de la justicia cambiándose de estado o de país, lo cual tornaría sumamente difícil su captura; lo que se traduciría en efectos meramente especulativos. Por tanto, pese a estar obligadas por la ejecutoria de amparo, en esas**

Leticia Flores Miranda
 70.6a.66.20.65.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.4.4.9d
 10/06/23 17:12:05

circunstancias, las autoridades responsables **no podrían cumplir con la sentencia protectora.**

Además, la concesión del amparo no prejuzga sobre ninguna eventual imposibilidad para ejecutar dicha orden.

Por lo expuesto, y fundado, se

RESUELVE:

PRIMERO. Se **sobresee** en el presente juicio de amparo respecto de las autoridades responsables y actos reclamados precisados en el cuarto considerando de este fallo, y atendiendo a los motivos expuestos en el mismo.

SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ******* ***** ***** *******, para los efectos precisados y conforme a los razonamientos expuestos en el último considerando.

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

Así lo resolvió **Bertha Patricia Orozco Hernández, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Hidalgo**, asistida de **Lucía Flores Miranda**, secretaria que da fe, hasta el día de hoy **trece de noviembre de dos mil veinte**, fecha en que lo permitieron las labores de este juzgado federal.

Rene



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - TRANSACCIÓN

Archivo Firmado:

4137448_0386000026383446001.p7m

Autoridad Certificadora:

Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante(s): 2

FIRMANTE				
Nombre:	Lucia Flores Miranda	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No. serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e4.9d	Revocación:	Bien	No revocado
Fecha: (UTC/ CDMX)	13/11/20 14:27:52 - 13/11/20 08:27:52	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA - SHA256			
Cadena de firma:	26 c1 da 2b 88 f1 a5 8e 2b a2 70 67 d4 3c 64 9c c4 b8 e3 7c 25 a4 9d 7d 3b 94 41 fc 09 25 95 19 9e 45 8e a1 fd 3c 8d 8f 4e 71 48 bc 80 0c 1f 1c 64 ea be 75 89 82 0b c1 96 93 00 00 65 20 87 8c 81 b3 92 96 f4 e0 aa c3 24 88 ca d5 92 e6 88 8f 28 ac 38 3c d3 ea 9c 97 f4 16 50 f6 4c 26 4e eb ae a3 98 40 f5 6b c8 7e 50 3f 47 e8 fe 4e c0 b8 47 01 36 29 07 de 2b 44 2f 35 d9 65 29 8a ab d5 0e 97 c4 4d 8e e2 a7 44 0d be 9c d0 f3 e0 39 60 cf 40 b1 51 04 28 fa 9e 06 ec 2d bf a9 55 52 55 52 6e 0b e3 da 31 7b 65 57 ce 3c 49 a0 09 53 5a 6a 73 7c 98 71 55 2c 39 c2 79 d4 e1 00 4e 34 b9 14 ee ce 23 50 93 05 c8 cf 61 b9 1b f2 2b 2f bf 19 4c 8f e9 7a 4d 9f 19 1e 43 69 c9 c1 1f ad e5 3b 8f 8f f5 78 98 76 53 d3 c2 de 0d dc a1 e4 63 3b 01 9b 5b 57 c8 e6 a2 61 b6 a8 a3 6d 31 cb c0			
OCSP				
Fecha: (UTC / CDMX)	13/11/20 14:27:52 - 13/11/20 08:27:52			
Nombre del respondedor:	OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02			
TSP				
Fecha : (UTC / CDMX)	13/11/20 14:27:53 - 13/11/20 08:27:53			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	28124875			
Datos estampillados:	9MQOIIYJj9CFe9T3FJIIx7f75UU=			



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FIRMANTE				
Nombre:	BERTHA PATRICIA OROZCO HERNÁNDEZ	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No. serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.aa.eb	Revocación:	Bien	No revocado
Fecha: (UTC/ CDMX)	13/11/20 14:30:47 - 13/11/20 08:30:47	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA - SHA256			
Cadena de firma:	d2 7f 52 0a 75 f5 fb b5 9f ce f6 9e 2e 31 0f e1 ef 15 05 91 58 e9 eb 01 c6 b6 59 dc f9 10 a5 2b 0d 2f 3f d7 73 cd a9 a4 e0 48 7b e0 fd df 42 3b 93 a5 15 9c 6d b7 1c b0 9a fc 3f 29 3e 89 6a 98 76 bf de 7d ea a0 0e 3f a2 b6 ff 70 ee 31 ac 6d ee 42 9e 44 fa 45 3d a0 19 78 c2 9b 0d 0b 68 67 7e 3d b2 be 29 0d 9e 0b e6 f6 33 1b b1 c6 95 c2 fb 2f c9 b1 af cc f5 01 06 d0 ab 74 59 2d 44 28 74 28 b6 19 12 12 4c 87 cf 31 6b 2a 65 01 c5 ff fc 83 99 f9 90 d9 53 16 05 9a a0 2f df 38 bd a7 9f cc c4 e3 55 e9 58 b0 e1 22 2a 2c 21 c9 5c 96 93 fd 2a 6c b4 bd d2 97 cb 82 ab 2b c6 3a c3 01 ea 17 b5 f2 79 be 44 2a 0a 18 68 31 4b 90 b0 5f c5 95 d3 5e d9 70 f7 d8 0b 55 d6 d9 61 4a 51 ee 86 d8 ce f0 21 f3 48 c5 17 84 30 08 30 9a 88 a1 40 ae 31 32 39 8a 04 07 42 79 bf cb 1f f3 1a 0a			
OCSP				
Fecha: (UTC / CDMX)	13/11/20 14:30:47 - 13/11/20 08:30:47			
Nombre del respondedor:	OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02			
TSP				
Fecha : (UTC / CDMX)	13/11/20 14:30:48 - 13/11/20 08:30:48			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	28125276			
Datos estampillados:	U8lITwhUdbfLY3T23Y8h6FjSWPQ=			

El trece de noviembre de dos mil veinte, el licenciado Gabriel César Téllez Sánchez, Secretario de Juzgado, con adscripción en el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo, hago constar y certifico que en esta versión pública no existe información clasificada como confidencial o reservada en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Conste.

PJF - Versión Pública